

TRABAJO FINAL DE GRADO

MEMÒRIA

GRADO EN DERECHO

CURSO 2017-18

El matrimonio civil durante el franquismo

Autora: Sofia Isanta Crusellas

Tutor: DR. Josep M. Martinell Gispert-Saüch

Fecha: 30.05.2018

DECLARACIÓN DE AUTORIA Y ORIGINALIDAD

Declaro que soy la autora de este trabajo. Su contenido es original y todas las fuentes utilizadas han sido debidamente citadas sin incurrir en fraude o plagio.

En caso contrario, conozco y acepto las medidas disciplinarias o sancionadoras que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable.

Lleida, a treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Firma:

RESUMEN

Avanzando en la historia conocemos cuál ha sido el origen y posición del matrimonio civil tanto a nivel político como en la sociedad, y en consecuencia su proceso jurídico formativo. El repaso histórico nos lleva indefectiblemente al proceso de secularización derivado de la ruptura político religiosa de la Edad media.

En España el matrimonio civil aparece tardíamente (1870) y muy condicionado por los presupuestos canónicos pese a presentarse, al inicio, como obligatorio. El código civil asumió después los contenidos básicos de esta inicial regulación, aunque dejando al margen el principio de matrimonio civil obligatorio. Esta regulación civil sufrirá durante un siglo el anacronismo de la influencia canónica, agudizada por la confesionalidad del franquismo. Y no fue hasta después de la Constitución de 1978 y especialmente a través de la Ley 30/1981 de julio (Segunda República al margen), cuando dicha regulación comenzó a regirse por criterios genuinamente civiles, tanto en lo que se refiere al sistema matrimonial como en lo referente al contenido mismo del matrimonio civil. Pues bien, de todo este proceso tratamos en el presente trabajo.

PALABRAS CLAVE

Matrimonio civil

Franquismo

Confesionalidad

Involución

Matrimonio canónico

Sistema matrimonial

ÍNDEX O SUMARIO

1. Marco histórico

1.1 previo

1.2 la barragania

1.3 el matrimonio cristiano y la secularización

1.4 ley provisional del matrimonio civil de 1870

1.5 el código civil

1.6 Situación desde la promulgación del Código civil hasta el Franquismo

1.6.1 Hasta la Segunda República

1.6.2 La Segunda República

1.6.3 El franquismo, el Concordato de 1953, y la ley 24 abril de 1958

2. Valoración del matrimonio civil en España hasta la Constitución de 1978

3. La Constitución Española

INTRODUCCION

El objetivo del trabajo es hacer un estudio del matrimonio civil, durante la época del franquismo, en el que se ponga de relieve cómo dicha institución, a consecuencia del principio de la confesionalidad católica del Estado, tuvo un papel meramente secundario frente al prevalente matrimonio canónico, que impidió su normal desenvolvimiento y evolución y su despegue real de los presupuestos confesionales de los que partía.

El contrasentido llegó a tal punto que el matrimonio civil quedó atrapado en su sistema rígido, víctima de su propia involución, mientras que, el matrimonio canónico, aunque con los límites propios de sus presupuestos dogmático-religiosos, fue adaptándose mejor a las nuevas realidades sociales, llegando a soluciones más flexibles, especialmente vía nulidad matrimonial y separación de mutuo acuerdo, más o menos encubierta.

El estudio trata, pues, de profundizar en esta etapa del matrimonio civil, sin renunciar al estudio de sus orígenes, como elemento de comprensión de su regulación actual, sobre bases netamente aconfesionales, y acorde con las tendencias más modernas del Derecho comparado.

CUERPO DEL TRABAJO

1. Marco histórico

1.1. Previo. El concepto de matrimonio civil, en nuestro contexto cultural, viene a ser la expresión, en este marco institucional específico, de un proceso más amplio y global,

que es el de la secularización, a consecuencia, entre otros fenómenos, de la ruptura de la unidad político-religiosa de la Edad media, y de la Reforma protestante.

Dicho proceso secularizador tiene distintos efectos y formas de manifestarse, dependiendo de las raíces culturales y religiosas de cada país, y no es un fenómeno sincrónico, sino que en cada país tuvo su propio ritmo.

No es de extrañar, que, en un país de tan profunda tradición católica como España, el proceso secularizador topara con fuerte resistencia y que la aparición del matrimonio civil fuera muy tardía en relación con la de otros países, pues no fue efectiva hasta la llamada ley provisional de matrimonio civil de 1870.

En todo caso, y como veremos en la breve síntesis histórica que sigue, cuando hablamos de precedentes no hablamos necesariamente de matrimonio civil, sino a alternativas a la unión matrimonial de carácter sacramental.

1.2 La barraganía. En el Derecho histórico, el matrimonio religioso era competencia de la Iglesia. Por consiguiente, las normas que regían eran las de carácter confesional, emanadas de la Iglesia católica, o normas civiles que de una u otra forma reproducían aquellas normas confesionales.

Esto no significa que el Derecho desconociera otras posibilidades legales de unión de la pareja, como una suerte de lo que hoy denominaríamos “uniones” o “parejas de hecho”, en todo caso alternativas al matrimonio sacramental.

Una de estas figuras la encontramos en la Partida Cuarta del cuerpo de las Siete partidas¹. “Las partidas” constituyen una gran obra doctrinal y legislativa del medievo, formada por siete textos, y es el texto a través del cual el derecho común fue establecido en Castilla.

¹ Las siete partidas de Alfonso X el sabio pueden consultarse en <http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T1.pdf> (último acceso 30.05.2018).

No está clara su autoría, que tópicamente se le atribuye al rey Alfonso X, pero hay quien dice que la obra es de juristas anónimos que durante el siglo XIII y hasta la primera mitad del siglo XIV reelaboraron la norma vigente hasta ese entonces, llamada el *Especulo*.

La barraganía² era la figura entendida como aquella unión entre un hombre y una mujer que convivían, pero no estaban casados, encontramos su símil en el concubinato romano. En la legislación Alfonsina esta figura estaba debidamente reglamentada, en partida cuarta, título XIV.

Esta institución sí tenía valor, y estaba reconocida, pero no ante la iglesia. Aunque ésta se vio obligada a tolerarla debido a que estaba muy extendida en la sociedad e incluso renunció a penarla, y la trató como un pecado simple, y propio del pueblo.

La barraganía fue definida en la partida cuarta como una fórmula de convivencia regulada y consentida por la ley civil, pero no por la canónica porque no se ajustaba a su doctrina.

La consecuencia fue que los fieles que incurrían en esa práctica infringían la norma religiosa y por tanto cometían infracción y pecado, pero pese a ello no se castigaba públicamente y como mucho si el sujeto era practicante se vería sometido a penas espirituales.

Socialmente se veía con buenos ojos porque pese a ser una situación de convivencia no matrimonial en pareja, permitía una mínima vinculación regulada y no era una mera unión con promiscuidad. Una característica de la barraganía era la exclusividad en la relación íntima por parte de la mujer, pero no para el hombre. A su vez era una forma de controlar por parte del hombre y determinar la paternidad de los hijos nacidos de esa unión.

El termino barragana iba referido a la mujer, soltera o viuda, que se unía a cualquier hombre que no fuese noble, que no tuviera ya una barragana, que no estuviera casada y que no fuera clérigo. Si eran solteras no podían ser vírgenes ni menores de 12 años.

² Maria Teresa Arias Bautista, *Barraganas & concubinas en la España medieval*. ArCibel editores, Sevilla. 2010. p.61

Podría pensarse que las barraganas eran aquellas mujeres que no habían conseguido casarse, o que tenían defectos físicos, o que querían una forma de vida fuera de las estrictas exigencias morales y sociales. Pero también existían limitaciones; estaba prohibido que existiese vínculo de parentesco o afinidad hasta el 4º grado entre los dos sujetos.

La ley II del Título XIV de la IV partida regulaba que el pacto de barraganía se materializaba mediante un contrato ante testigos; estos debían ser “hombres buenos”. En dicho contrato se establecían las obligaciones de las partes, la más significativa de las cuales era una previsión económica, del hombre hacia la mujer, para asegurar el mantenimiento de los hijos que surgieran de esa unión. Y en caso de que el hombre falleciese, podía ser reclamada esa cuantía a sus parientes.

La barraganía muy posiblemente estuvo más extendida de lo que se cree. El matrimonio canónico era un lazo eterno imposible de romper, sobre todo para las mujeres, ya que los hombres tenían más posibilidades prácticas de desentenderse del vínculo matrimonial. Y con la barraganía era posible una unión alternativa más relajada, pero de la que también nacían derechos y obligaciones. Las barraganas eran las mujeres legítimas y responsables subsidiarias de sus parejas, y podían disponer de sus bienes si él fallecía, siempre que viviesen juntos hasta el fallecimiento.

1.3 El matrimonio cristiano y la secularización

En Occidente, y en el marco de la unidad político religiosa de la Edad media, sólo existía el matrimonio de la Iglesia, regulador por el Derecho canónico, y acaso por algunas leyes civiles que básicamente reincidían y se basaban en el Derecho confesional.³

Ahora bien, el matrimonio canónico tuvo su propia evolución. Originariamente, el matrimonio cristiano podía ser clandestino, sin ningún control por parte de las autoridades. Poco a poco, y como consecuencia, entre otras razones, de la desconfianza

³ Juan Goti Ordeñana, *Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado*, Donostia, 1991 p.27-37

de la propia Iglesia en sus fieles, se sintió la necesidad de controlar el acto de la celebración mediante un acto formal (y de inscribir registralmente los matrimonios). Pero esta tendencia hacia el llamado matrimonio in facie Ecclesiae (frente la iglesia) no pasó de ser, durante muchos siglos, una mera recomendación, de modo que no fue hasta el Concilio de Trento cuando se estableció unos requisitos formales (consentimiento ante testigo cualificado y dos o tres testigos comunes) y aun así no definitivamente, porque durante siglos se distinguió entre lugares tridentinos –donde se había promulgado la normativa del Concilio y regía el Capítulo Tametsi– y lugares no tridentinos, donde todavía no estaba vigente dicha regulación.⁴

En 1564, el rey Felipe II introdujo como ley del estado el contenido del concilio de Trento, estableciendo la forma en la que debía celebrarse el matrimonio religioso, y solo si era así celebrado sería válido. Esa tendencia se reforzó con el concordato de 16 de marzo de 1851 entre la santa sede y el estado español, dejando atrás la posibilidad de contraer matrimonio valido sin seguir todas las exigencias de forma canónicas, y estableciendo una sola forma de contraer matrimonio.

Obviamente, la Reforma protestante, en cierta medida la contrarreforma, y en todo caso el inevitable proceso secularizador provocó que, progresivamente el Estado fuera asumiendo competencias en materia matrimonial, aunque dicho proceso fue desigual en los distintos Estados, no llegando a España el matrimonio civil sino hasta finales del siglo XIX.

1.4 Ley provisional del matrimonio civil de 1870

Enmarcado en el contexto histórico de la revolución gloriosa o septembrina de 1868, emergió por primera vez la importancia y reconocimiento de la figura del matrimonio civil, si bien con una gran dependencia de la concepción canónica del matrimonio, que se secularizaba en la forma de celebración, pero cuyos contenidos estaban claramente inspirados en la doctrina confesional. Es un primer paso, inscrito en el proceso secularizador en el que el ser humano intentaba ser dueño del mundo, de sus creencias y sus ideales liberándose de las cadenas de las exigencias normativas y las tradiciones

⁴ José Sánchez-Arcilla Bernal, *La formación del vínculo y los matrimonios clandestinos en la baja Edad Media*, Madrid, 2010 p.29.

religiosas. El hombre pasa, de estar frente a un mundo de naturaleza totalmente sacralizada que gira en torno a dogmas imperativos divinos, a tener una percepción individual de sí mismo. Como consecuencia de esa des divinización de su entorno y sus instituciones, el ser humano contempla la posibilidad de una figura de matrimonio no sacramental.⁵

En septiembre de 1868, con una revolución generalizada y Isabel II expatriada, se constituyó el nuevo gobierno, convocaron elecciones en las cortes constituyentes (por primera vez aparece el sufragio universal masculino en España). En 1869 se elaboró la constitución, anunciándose en su artículo 21 la libertad religiosa, muy importante para que la figura del matrimonio civil fuese posible. Motivado por los movimientos sociales en toda Europa finalmente la primera república española se instauró, un régimen político que duró del 11 de febrero de 1873 al 29 de diciembre de 1874.

Previamente, el 18 de junio de 1870 nació la primera ley del matrimonio civil obligatorio. Aunque debemos recalcar que fue una ley muy conservadora. Si bien se instauró el principio de matrimonio civil obligatorio –de escasa duración por su falta de arraigo y aplicación sociales– el primer artículo asentaba la perpetuidad e indisolubilidad del vínculo. Y el derecho positivo con que se regulaba estaba inspirado, en lo sustancial, en el Derecho canónico.⁶

En ese momento esta nueva ley tuvo un fuerte impacto en las bases estructurales del ordenamiento jurídico español, pero sin embargo tuvo una vida de solo cinco años, pero suficientes para confirmar el ideólogo liberal de España respecto de las cuestiones en las que hasta el momento intervenían la iglesia y el Estado. De todas maneras, cuando hablamos de la vigencia de cinco años, nos estamos refiriendo al principio o sistema de matrimonio civil obligatorio; no al resto de los contenidos, que se perpetuó gracias a

⁵ Mariano López Alarcón y Rafael Navarro-Valls, *Curso de Derecho Matrimonial Canónico y concordado*. Tecnos. Madrid 2001, p.445.

⁶ José María Rives Gilabert, Antonio Pablo Rives Seva, *Evolución histórica del sistema matrimonial español*. Noticias Jurídicas, 2001. Disponible en: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11680-evolucion-historica-del-sistema-matrimonial-espanol/> (Último acceso 30.05.2018).

que el Código civil incluyó lo sustancial de los demás contenidos de la ley en la regulación del matrimonio civil.⁷

El 6 de marzo de 1869 nació el proyecto de esta ley. En la CE de 1869 ya se había instaurado la libertad de cultos en España, siendo su automática consecuencia lógica el instaurar un matrimonio no religioso. Esto fue el respaldo necesario para hacer efectivo el matrimonio civil.

Siguiendo la línea del liberalismo, una de las principales argumentaciones que podemos leer en la Exposición de Motivos, obra de Eugenio Montero Ríos, a la sazón Ministro de Gracia y Justicia, es que la libertad religiosa era necesaria y sin ella no había libertad de pensar, y por ende ni libertad científica, ni filosófica, ni ideológica, ni de pensamiento etc. Añadiendo que el matrimonio era uno de los actos más importantes de la vida, y por tanto debe ser un acto hecho con la libertad de los ciudadanos independientemente de su religión, porque si no, no son ciudadanos sino fieles.⁸

En cierto modo Montero Ríos humanizó la figura del matrimonio, mostrándolo como una institución humana clave para la vida de la población española, y por ello mismo regulada por el Estado. Así, pues, separa el matrimonio como institución civil de la religión, sin perjuicio de que pueda ser sentido como manifestación religiosa.

Sin embargo, el punto de involución consistió en el hecho de que el Estado se dedicó a adaptar la legislación canónica, que era la que había hasta el momento, al ámbito civil. Probablemente, una evolución más drástica del matrimonio civil, con la opción de disolverlo y con una regulación más laica, hubiera sido difícilmente compatible con la moral de la sociedad de la época.

1.5 El código civil

En España la promulgación del primer código civil fue muy tardía, debido a los antecedentes y tensiones político y religiosos. Data del 24 de julio de 1889, y se ha

⁷ Víctor Reina, Josep M. Martinell, *Curso de Derecho Matrimonial*, Marcial Pons. Madrid 1995. p.147.

⁸ Andrés Ollero. *El debate de la ley de matrimonio civil de 1870*. en Revista General de Legislación y jurisprudencia, febrero 1981. Granada. p.136.

mantenido vigente hasta nuestros días. El código civil español se creó con la idea de tener un código único para todo el territorio, puesto que faltaba uniformidad y unidad en la legislación, y se formó sobre la base del derecho castellano, aunque fue bastante respetuoso con los distintos derechos forales.⁹

En un periodo de inestabilidad política, tras la revolución llamada “La Gloriosa” de septiembre de 1868 que provocó la abdicación de Amadeo de Saboya. Y con la posterior restauración de la monárquica en 1874, que gobernaría de forma liberal y con el apoyo de las cortes, se instauró la primera república. Para la figura del matrimonio eso se tradujo en un breve período de tiempo, de 1870 a 1875, en el que el matrimonio civil era aceptado, siendo el canónico no el único posible para los españoles.¹⁰

Este cambio político, la restauración de la monarquía, introdujo un importante cambio en el régimen civil del matrimonio, llevado a cabo por el decreto de 9 de febrero de 1875, siendo ministro de Gracia y justicia Francisco Cárdenas. La principal disposición de este era atribuir plenos efectos retroactivos a los matrimonios canónicos celebrados desde la vigencia de la ley de 1870 y el restablecimiento de la forma canónica conservando la civil con carácter excepcional para los no católicos.

En su preámbulo constaba el deber imperioso de apresurarse a restablecer la armonía entre legislación civil y canónica, sentido por el gobierno. Reconociendo al sacramento del matrimonio católico todos los efectos de la ley civil y restituyendo en cierto modo la jurisdicción exclusiva de la Iglesia. Sin embargo, este decreto no excluía el contenido de la ley de 1870, dejándola subsistente para la celebración del matrimonio civil para los no católicos. Este decreto exigía además la inscripción de los matrimonios canónicos en el registro civil.¹¹

⁹ Felipe Sánchez Román, *La codificación civil en España en sus dos periodos preparación y de consumación*, Madrid, 1890. p. 38.

¹⁰ José Barros Guede, *Las modificaciones sobre el matrimonio en el código civil español* en Revista Eclesiástica 17.08.2014. Disponible en: <https://www.revistaecclesia.com/las-modificaciones-sobre-el-matrimonio-en-el-codigo-civil-de-espana/> (Último acceso 30.05.2018).

¹¹ Amadeo de Fuenmayor, *El matrimonio en el código civil*. Conferencia en la Real Academia de jurisprudencia y Legislación en el ciclo conmemorativo del centenario del Código Civil español 6.02.1989. p. 229. Disponible en: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iuscan30&div=22&id=&page=> (último acceso 30.05.2018).

Fue completado por la instrucción de 19 de febrero y R.O de 27 de febrero de 1875, que indicaba a los jueces municipales que solo podían autorizar los matrimonios de aquellos que manifestasen indudablemente que no pertenecían a la iglesia católica.¹²

No hay que dejar de tener en cuenta la constitución española vigente en cada momento decisorio de la evolución del matrimonio civil. En este periodo mencionamos la de 1876, que duró hasta 1923 al proclamarse la dictadura de Primo de Rivera. En esta el estado se manifiesta favorable a una confesionalidad, en el artículo 11 estableció que la religión católica era la propia del estado, además la iglesia estaba subvencionada por el estado, al decir que mantendría el culto y a sus representantes. Sin embargo, se comprometía a respetar y tolerar los demás cultos siempre que respetasen la moral cristiana. No se permitían manifestaciones públicas no católicas, pero nadie podía ser molestado por sus opiniones religiosas, por lo que fue una vuelta a la confesionalidad.¹³

Como hemos dicho, el código civil se creó sobre la base del derecho castellano, porque era el que tenía mayor difusión territorial. La base presentada ante el senado el 14 de marzo de 1887 propuso establecer en el código civil dos formas de matrimonio. Una era la forma canónica, que debían tomar aquellos que profesaran la religión católica y la otra era la forma civil. Con los matices de que la forma canónica producía efectos civiles sólo si se celebraba en conformidad a lo establecido por el concilio de Trento, y que un funcionario público o juez asistiese con el fin de asegurar su inmediata inscripción en el registro civil.

La base tercera fue negociada y consultada con la Santa sede, esta vez la regulación para introducir este sistema matrimonial fue hecha teniendo en cuenta la comunidad religiosa, no ignorándola. Ello explica también que no se tuvieran en cuenta las celebraciones matrimoniales religiosas no católicas para incluirlas en el código civil.¹⁴

¹² José Rives Gilabert, Antonio Pablo Rives Seva , ob. cit.

¹³ Juan Goti Ordeñana, ob. cit., p.220

¹⁴ Víctor Reina, Josep M. Martinell, ob. cit., p.159

Alonso Martínez, jurista, ministro y político, negoció con la Santa Sede en 1886. La santa sede dejó que el estado regulara los efectos civiles del matrimonio, gracias a la noción de tolerancia, pacificación y concordado entre las partes. La santa sede cumplió su deseo de que el matrimonio canónico tuviera efectos civiles y que la presencia de un representante en el acto de celebración tuviera como único fin la inmediata inscripción en el registro civil.

El 24 de julio de 1889 se promulgó definitivamente el Código Civil. En relación con el matrimonio civil, el libro primero título IV, capítulo primero (en especial, art. 42 contemplaba y reconocía dos formas de matrimonio; el canónico que debían contraer todos los que profesaban la religión católica y el civil.

El art. 49 habla de que la forma civil se hará ante el juez o funcionario y que la forma religiosa legalmente prevista producirá efectos civiles. El juez o funcionario debía encargarse de que así fuera, y se abstendría de proceder a la autorización del matrimonio si los cónyuges ya estaban casados civilmente por matrimonio celebrado de forma canónica. Y si estaban casados en forma civil y después se casaban en forma canónica no se inscribía esta segunda forma en el registro civil.

En este sistema la duplicidad de matrimonios no tenía cabida, porque todo matrimonio civil o canónico produciría efectos civiles desde su celebración, es decir, se adquiriría el estatus o condición de persona casada (aunque cada uno se regía por su propia legislación y jurisdicción), y una vez celebrado de una forma no se podía celebrar por la otra.¹⁵ Con el matiz de que, en caso de previo matrimonio civil, el canónico no es que se prohibiera, pero carecía de efectos civiles.

El matrimonio civil tenía carácter subsidiario, era un sistema dualista en el que el canónico era el principal y el civil una suerte de cajón de sastre para dar respuesta a los supuestos, considerados excepcionales, de que no se profesara la religión católica que era la del Estado. El contenido del matrimonio civil fue en esencia el mismo que el de la

¹⁵ José M. Miquel González, *Sistema matrimonial español*, 2001, disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Jose_Miquel_Gonzalez/publication/28250204_Sistema_matrimonial_espanol/links/0a85e5325f4406d6a7000000/Sistema-matrimonial-espanol.pdf?origin=publication_detail (último acceso, 30.05.2018).

ley de 1870, excluyendo su parte más retórica (la dedicada a la naturaleza del matrimonio) pero excluyendo también el principio de matrimonio civil obligatorio. Sus propiedades (monogamia e indisolubilidad) y sus fines (procreación y educación de los hijos, cooperación entre los esposos) eran los mismos, a su vez inspirados en el Derecho canónico.

1.6. Situación desde la promulgación del Código civil hasta el Franquismo

1) Hasta la Segunda República.

A partir de la redacción del código civil, la interpretación del art. 42 fue variada llegando a existir conflictos en su aplicación. La discusión era en torno a la previa declaración de no pertenecer a la religión católica para poder contraer matrimonio civil. Para contraer matrimonio de forma civil, debía existir el citado presupuesto de la no pertenencia a la religión católica, y conviene aclarar que, con independencia de la manera de acreditar este extremo, se daba por bueno que uno solo de los contrayentes cumpliera dicha condición.

Sin embargo, en cuanto a su acreditación, hubo discrepancias. Una norma interpretativa fue la Real orden de 28 de diciembre de 1900, según la cual bastaba con la simple declaración ante el juez municipal, o la autoridad competente de uno de los contrayentes, de no profesar la religión católica.¹⁶

El nuevo gobierno liberal (Conde de Romanones) dictó la Real Orden de 27 de agosto de 1906, estableciendo que ya no se exigía ningún tipo de declaración en relación con la religión que profesasen los contrayentes para poder contraer matrimonio civil, porque el mero hecho de casarse por lo civil ya equivalía a manifestación de su no catolicidad. De hecho, se convertía en un sistema puramente facultativo, al no estar penalizada la celebración civil por ninguna condición especial. Y suponía también considerar que la previsión del art. 42 C.c. no era estrictamente jurídica, sino más bien de carácter descriptivo.

¹⁶ José Rives Gilabert, Antonio Pablo Rives Seva, ob. cit.

La orden tuvo escasa vigencia, porque se consideró que invadía competencias legislativas que no le eran propias y transgredía el art. 42, con lo que el 28 de febrero de 1908 fue derogada por una nueva orden. Con ella, se retornó a la exigencia, por lo menos de uno de los contrayentes, de declarar la aconfesionalidad para contraer matrimonio civil.

Esto duró hasta la republica de 1931, que por orden de 10 de febrero de 1932 se declaró derogado el contenido de la orden de 1900.

2) La Segunda República

La segunda república en España fue una etapa que se inició el 14 de abril de 1931 y duró hasta el 1 de abril de 1939, cuando acabó la guerra civil, dando paso a la dictadura franquista. Con esta nueva etapa hubo un cambio total en el sistema de relaciones entre el estado y las confesiones, se incorporó el principio de laicidad en la constitución republicana expulsando a la iglesia de su posición privilegiada en las nuevas instituciones de la república.

Con la Constitución de 9 de diciembre de 1931 el estado se declaró republicano, democrático y laico. Se estableció en el artículo 3 el principio de aconfesionalidad del estado, adoptando una postura separacionista y con una valoración negativa de la religión. Pero se reconocía y garantizaba la libertad religiosa e ideológica en territorio español, con el único límite de que se respetase la moral pública y que esta se ejerciese privadamente.¹⁷

Con la orden de 10 de febrero de 1923 se excluyó la declaración de la aconfesionalidad para poder contraer matrimonio de forma civil. Y la ley de 28 de junio de 1932 estableció oficialmente el matrimonio civil obligatorio. Solo se le reconocía efectos jurídicos al matrimonio celebrado de forma civil, pero todos los matrimonios celebrados con forma religiosa anteriores a la entrada en vigor de la ley si quedaron vigentes, era una ley sin efectos retroactivos.¹⁸

¹⁷ Juan Goti Ordeñana, ob. cit., p. 225

¹⁸ Víctor Reina, Josep M. Martinell, ob. cit., p.153.

La segunda república fue un paso más allá, y se constitucionalizó el divorcio, entrando en vigor la ley el 2 de marzo de 1932, y presentada a la cámara el 4 de diciembre de 1931 por el ministerio de Justicia, Fernando de los Ríos. Por primera vez el vínculo del matrimonio ya no era indisoluble, cosa que no agradó en absoluto a la iglesia y el episcopado español la condenó. Aunque las causas de divorcio eran limitadas, fue un paso más hacia la igualdad entre el hombre y la mujer, con lo que la disolución del matrimonio no eximia a los padres de sus obligaciones para con los hijos.

Esta legislación matrimonial tuvo varias consecuencias y objetivos:

- El objetivo de transformar la sociedad. Incluyó más libertad para la mujer, eliminó contenido machista que impedía un avance en la igualdad de sexos. Ya que se eliminó el art 57 del antiguo código civil, el cual decía que la mujer debía obedecer al marido.¹⁹
- Implicó una separación radical por primera vez entre Iglesia y Estado. Ya que la iglesia quedó fuera de las instituciones públicas republicanas.
- La Iglesia perdió poder y dominio sobre los cónyuges. Ya que el juez de primera instancia sería el que dispensase cualquier impedimento, y no la iglesia como hasta el momento. Y la validez o nulidad matrimonial serían competencia de los tribunales civiles

Hasta el año 1932 el matrimonio solo se disolvía por la muerte de uno de los cónyuges, pero con la llegada de la primera ley del divorcio en España, se disolvía lo que hasta ese momento parecía imposible; el vínculo canónico (obviamente, desde la perspectiva civil) y el vínculo civil.²⁰

Esto no gustó nada a la iglesia, y en un primer momento se opuso. Pero ante la fehaciente perdida de su situación privilegiada, la iglesia reaccionó. Aceptando la posibilidad de que los matrimonios contraídos por fieles canónicos, pudiesen acudir a la jurisdicción civil en vía de separación, siempre que tuvieran un permiso del Ordinario y una información previa, que avalase la existencia de una causa canónica de separación.

¹⁹ Leire Imaz Zubiaur. *Superación de la incapacidad de la mujer casada para gestionar su patrimonio*,. Vizcaya 2008. p.70

²⁰ Víctor Reina, Josep M. Martinell, ob. cit. p.153.

La iglesia no aceptó el divorcio, pues el vínculo matrimonial canónico es indisoluble, sin embargo para no perder todo el protagonismo que había tenido en la sociedad, debía adaptarse a esta, pero en la forma en que sus directrices y sacramentos se lo permitiesen.²¹

Ello queda reflejado en la instrucción de 25 de junio de 1932, publicada por el episcopado español. La iglesia recurrió a este remedio para mantener paralelamente sus propias soluciones procesales.²²

Una vez recuperó todo su poder, con la llegada del franquismo, se volvió a los juicios interminables, con sus diversas apelaciones, para poder lograr esa separación. Los cuales, en la mayoría de ocasiones, a veces tras décadas de juicios, acababan con desestimación. Pues la iglesia volvía a imponer sus preceptos y principios sin necesidad de flexibilizarlos o ceder para hacerlos cumplir.

El 18 de julio de 1936 con la insurrección militar el país se dividió entre los militares que estaban en contra del régimen establecido, y los republicanos que sí estaban a favor. El 29 de septiembre de 1936 el general Francisco Franco fue nombrado jefe del gobierno del estado español, asumiendo el poder de la zona sublevada. Finalmente, una ley de 30 de enero de 1938 organizó la administración central del estado de forma que todas las decisiones debían estar dirigidas y refrendadas por Franco, constituyendo así la dictadura franquista. La zona que continuó bajo el gobierno legítimo de la república intentó resistir al golpe militar hasta el final de la guerra de la civil en 1939.²³

Toda la legislación republicana se derogó; el argumento de los sublevados fue que la república y por ende sus leyes eran una agresión alevosa contra los sentimientos de los católicos españoles. El código civil anterior se recuperó en su totalidad, lo que significó volver a una situación de desigualdad y una posición de inferioridad de derechos para la mujer.²⁴

²¹ Cristóbal Robles Muñoz, *La Santa Sede y la II República. De la Conciliación al conflicto (1931)*, editorial, ACCI, 2018, pp. 348/465

²² Víctor Reina y Josep M. Martinell, ob. cit. p. 155.

²³ Revista de historia, *La guerra civil española en el contexto internacional*, 18.04.2016, disponible en: <https://revistadehistoria.es/la-guerra-civil-espanola-contexto-internacional/> (último acceso 30.05.2018).

²⁴ Juan Goti Ordeñana, ob. cit. p. 221.

La ley de matrimonio civil obligatorio de 28 de junio de 1932 fue derogada por la ley de 12 de marzo de 1938, provocando importantes consecuencias. Se recuperó el sistema de matrimonio canónico obligatorio para los católicos y la forma civil para los no católicos. Los matrimonios canónicos celebrados durante su vigencia se declararon con plenos efectos y los matrimonios civiles celebrados durante su vigencia, cuando uno de los cónyuges estuviera canónicamente ligado a otra persona, fueron declarados nulos.²⁵

La institución del matrimonio en ese momento se tornó en un sistema que otorgaba efectos civiles al matrimonio celebrado en forma canónica y que sólo se podía celebrar en forma civil cuando se declarase la no catolicidad, es decir que los contrayentes demostrasen la no profesión católica. La orden de 22 de abril de 1939 estableció la exigencia de inscribir los matrimonios canónicos celebrados durante la república.²⁶

El matrimonio civil prácticamente desapareció de la sociedad española. Únicamente era permitido cuando al menos uno de los cónyuges profesara otra religión o se declarase ateo, con todos los inconvenientes que suponía para la época. Así pues, la practica era muy difícil contraer matrimonio de forma civil.²⁷

Pero al querer eliminar toda la legislación laica de la república, en los matrimonios civiles que quedaban sin efectos (como consecuencia de la derogación de la ley del divorcio y la del matrimonio civil obligatorio) se producía una disolución del vínculo matrimonial contraído, una especie de divorcio. Y el divorcio no estaba contemplado en ninguna circunstancia, y de ningún tipo, en el régimen franquista. Por lo que los matrimonios civiles contraídos durante la vigencia de la ley de 28 de junio de 1932 de matrimonio civil, en la práctica continuaron teniendo eficacia civil. Llegando incluso el Tribunal Supremo a avalar su validez, considerándolos firmes a todos los efectos.²⁸

²⁵ Carlos Jiménez Villarejo, *en* *Hispanica Nova*, revista de historia Contemporánea. Número 7. 2007. p.11

²⁶ Xosé Chao Rego, *Iglesia y franquismo: 40 años de nacional-catolicismo (1936-1976)*, Madrid 2007. p.105

²⁷ Demetrio Fernández Ucelay, *The historical evolution of all the ways to extinguish the Matrimonial bond*, Universidad de La Laguna. 2016. p. 8.

²⁸ Víctor Reina, Josep M. Martinell, *ob. cit.* p. 158.

La ley del divorcio de 02 de marzo de 1932, fue derogada por la ley de 23 de septiembre de 1939.²⁹ Conllevando efectos retroactivos para aquellos matrimonios a los que se les aplicó el divorcio, en virtud de dicha ley. Y para el caso de los matrimonios contraídos en base a la ley de matrimonio civil de 1932 en los que uno de los contrayentes estuviera divorciado según la ley de divorcio republicana de 2 de marzo de 1932 y que ese matrimonio anterior disuelto fuese un matrimonio canónico, entonces sí que podían ser disueltos a instancia de parte. Es decir, conllevó que se pudiese impugnar tanto el divorcio obtenido como el matrimonio civil subsiguiente por razones de “conciencia” y *sine die*.³⁰

En la dictadura franquista había un interés superior en dar prioridad a los creyentes y a los sacramentos, entre estos el del matrimonio indisoluble, y para la iglesia el matrimonio civil celebrado durante la vigencia de la ley de matrimonio civil estaba en una posición inferior al matrimonio celebrado de forma canónica.

Sin embargo, hubo muchos casos en los que los interesados no utilizaron nunca esa facultad de impugnación. Por ello el actual código civil incluyó una primera disposición transitoria en la que se establece que los divorciados por sentencia firme al amparo de la ley del divorcio de 1932, podrán contraer matrimonio de nuevo, excepto si la sentencia de divorcio fue anulada judicialmente.³¹

Para el caso en que una misma pareja se hubiera casado por la forma civil durante la República y en el Franquismo se hubiera casado en forma canónica, el primer matrimonio no tenía ninguna validez. Pero tampoco se había privado de validez a los matrimonios celebrados en forma civil durante la república.

El tribunal supremo se pronunció al respecto, declarando que los matrimonios civiles celebrados durante la vigencia de la ley de 28 de junio de 1932 tenían efectos civiles de forma plena, y eso era independiente de que el segundo matrimonio en forma religiosa

²⁹ BOE. Ley de 23 de septiembre de 1939 relativa al divorcio.

³⁰ José Rives Gilabert, Antonio Pablo Rives, ob. cit.

³¹ Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil, y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. BOE, núm 172. 20 de julio de 1981, 16457. Disposición transitoria, primera.

tuviera efectos. Para el caso de que este segundo matrimonio canónico fuera con otro contrayente distinto del primero no se le podían reconocer efectos civiles.

De ahí en adelante cuando se pretendía inscribir un matrimonio civil celebrado en forma canónica por una persona que ya hubiera contraído matrimonio en forma civil con un cónyuge distinto no se permitía dicha inscripción. Y para poder inscribirlo y ser reconocido primero debía ser declarado nulo el primer matrimonio en forma civil, conforme la legislación civil.^{32 33}

Con la llegada del franquismo, los requisitos para celebrar matrimonio en forma civil tornaron en mucho más estrictos, lo que conllevó que fuera muy difícil acceder a este. Pues se exigiría por vía administrativa y legal que los contrayentes probaran la acatolicidad.

3). El franquismo, el Concordato de 1953, y la ley 24 abril de 1958

El régimen político que surgió a partir de 1936, al que llamamos régimen franquista, puso fin a la separación de iglesia y estado y a las libertades que había hasta entonces. Una característica de este nuevo régimen es la vuelta al sistema confesional, y unas mismas ideas, valores, e ideologías tanto en materia política como religiosa.^{34 35}

A lo largo de este análisis histórico hemos visto que las diversas Constituciones han sido la norma suprema e informadora del sistema jurídico y político. Con la dictadura franquista esto ya no es así, y la ausencia de esta es suplida por unas leyes llamadas fundamentales, que condicionaban toda la legislación pese a no tener contenido jurídico democrático y constituir una apología del régimen.

La contradicción es que la ley que regulaban los derechos y deberes de la persona, llamada Fuero de los Españoles, estaba limitada por el principio de confesionalidad. La

³² Diego Espín Cánovas, *Breve exposición de la eficacia civil del matrimonio canónico en el código civil español*. Universidad de Murcia. 1990. p.12.

³³ Víctor Reina, Josep M. Martinell, ob. cit. p. 167.

³⁴ Julián Casanova, *La iglesia y la represión franquista*, Universidad de Zaragoza, 26.11.2008. Disponible en: https://elpais.com/diario/2008/11/26/opinion/1227654005_850215.html (último acceso 30.05.2018).

³⁵ Raül Moreno Almendras, *El franquismo y nacionalismo español, aproximación a sus aspectos fundamentales* en *Hispania nova*, revista de historia contemporánea. Número 12. 2014... p.15.

religió catòlica era la oficial del estat i tot el demés havia de no ser contrari a la moral i les idees.

Vem per tant que es perd la llibertat que hi havia fins llavors. L'Estat a qui protegia era al creient, no al ciutadà. I els ciutadans no catòlics no tenien la mateixa protecció, únicament se toleraven els cultes i no eren molestats ni perseguits per les seves creences religioses, sempre que fossin exercides en un àmbit privat.

El sistema matrimonial consistí en matrimoni canònic amb efectes civils obligatoris per a tot aquell que professava la religió catòlica, mentre que només per als que declaraven que no ho feien un matrimoni civil, sense altra opció ni elecció. Per contraer matrimoni per la forma civil es exigia la no catolicitat, però no de un dels contractants sinó dels dos; exigint-se a més prova positiva de la acatolicitat (no bastava la simple declaració de no professar); una prova positiva que ben podria considerar-se prova *diabòlica* perquè no tractava de demostrar un fet sinó un no fet.³⁶

Els únics que podien contraer matrimoni en forma civil eren els catòlics que encara estant batejats foren excomulgats per sentència o els no batejats. En ambdós casos la no catolicitat es probava amb la sentència o document acreditatiu. I era necessari que els dos contractants declarassin la seva no catolicitat documentant-ho fehacientment. En cas de no poder demostrar-ho a vegades es acceptava una declaració jurada de no estar batejat. Però en la pràctica això suposava declarar-se obertament anticatòlic i per tant contrari al règim.³⁷ Per al supòsit de que només un dels contractants no professava la religió catòlica, es exigia que el matrimoni es celebrés en forma catòlica.

Cal entendre que el significat que se li donava a la frase “professar la religió catòlica” era equivalent a no haver-se apartat ni renunciat a l'església. Per això que la majoria de la població entrava dins del grup de “catòlics”.

³⁶ Víctor Reina, Josep M. Martinell, ob. cit., p.161

³⁷ Luis Ignacio Amorós, La ley de matrimonio civil, en revista InfoCatolica, Ingeniería Social: 16.01.2011.

La estrecha relación entre el estado y la santa sede se manifiesta con el concordato de 27 de agosto de 1953, gracias al cual se produce una reordenación legislativa, que era muy necesaria. En él se reafirmaron los principios sobre los que yacía el sistema matrimonial español.

Además, el concordato trajo muchos cambios, uno de ellos fue la sustitución del término “Formas de matrimonio” por “clases de matrimonio”. Con este simple cambio terminológico la iglesia consiguió que el código civil asumiera globalmente el matrimonio canónico y su regulación propia.³⁸

Se reconocieron por parte del estado plenos efectos civiles al matrimonio canónico, por lo que únicamente era necesaria su inscripción en el registro civil para su plena formalización, y esta se practicaba con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio.

Se produjo un reconocimiento del matrimonio canónico por parte del estado, que se comprometió a reconocerle efectos civiles desde su celebración, situando la eficacia en el mismo matrimonio y no en el acto de contraerlo, y mucho menos en la inscripción civil. Que, aunque era la única condición que se imponía por parte del estado se concretó en un sistema muy sencillo.³⁹

Con ello se dio más seguridad, protagonismo y arraigo a la forma canónica que a cualquier otra forma de matrimonio.

Ley 24 de abril de 1958, por la que se modifican determinados artículos del código civil⁴⁰, en esta reforma dio una nueva redacción a numerosos artículos del CC relativos al matrimonio, el motivo del cambio fue dar cumplimiento a las cláusulas concordatarias sobre el tema, y al compromiso de reconocer plenos efectos civiles al matrimonio canónico.

³⁸ Víctor Reina, Josep M. Martinell, ob. cit., p.169

³⁹ José Tomás Martín de Agar y Valverde, *El matrimonio canónico en el derecho civil español*. Eunsa, Pamplona. 1985. p.75

⁴⁰ BOE número 99, de 25 de abril de 1958, p. 730-739.

Y conllevo muchos cambios, el primero de ellos fue una nueva terminología; el cambio del termino de formas de matrimonio por el de clases de matrimonio. Queriendo recalcar que el matrimonio civil y canónico son instituciones distintas, no dos versiones de una misma. Este cambio terminológico fue debido a tener que cumplir con lo pactado con la iglesia.⁴¹

La segunda novedad, fue que el artículo 42 del código civil recogía que para contraer matrimonio civil debía probarse que ninguno de los contrayentes profesase la religión católica, es decir la acatolicidad de ambos.

Con ello se dejaban atrás la simple declaración de los contrayentes como requisito, la acatolicidad y su prueba ya no era “automática”, debía probarse. Y además la validez del matrimonio civil estaba condicionada a la veracidad de esta prueba, siendo causa de nulidad la ausencia de prueba de acatolicidad.

Con ello se elevó a categoría de ley forma una cuestión administrativa. Debido a que se aplicaba como clases, y no como formas. El matrimonio canónico, se regía por las disposiciones de la Iglesia, y su eficacia civil sujeta a su validez canónica solamente. Reconocer el matrimonio canónico implicaba reconocer la reglamentación y la jurisdicción eclesiástica.

Es decir, que, si dos personas estaban casadas por la iglesia, y este matrimonio era válido y reconocido por esta, entonces también lo estaban para el estado. Simplemente debían inscribirlo en el registro, lo que tenía valor meramente declarativo.

La iglesia no admite para sus fieles otra forma de matrimonio que la canónica, y para el estado de ese momento el catolicismo era uno de sus pilares fundamentales. Por ello, el estado y con confirmación del T.S, estableció que un matrimonio que según derecho eclesiástico se calificara como canónico seria competencia de la jurisdicción eclesiástica.

⁴¹ José Tomas Martin de Agar y Valverde, ob. cit. pp.77-86.

Todos estos factores, provocarían la involución del matrimonio en forma Civil. Debido que era casi imposible acceder a él, no solo por los motivos legislativos, sino también por la presión social en una época de ideas muy conservadoras. Además, la costumbre pre establecida antes de la ley de 24 de abril de 1958, era que administrativamente toda persona bautizada era católica.

El matrimonio civil en consecuencia quedó como una opción residual, sin permitir su correcto desarrollo normativo y social.

4) Incidencia del Concilio Vaticano II y libertad religiosa de origen confesional

En una dictadura no hay posibilidad de un conflicto o choque de normas, puesto que solo hay un poder y una ideología. Pero con la declaración de *dignitatis humanae* del Concilio Vaticano II, de 25 de enero de 1959, sí hubo conflicto de legislaciones entre el estado español y la Santa Sede.

Porque su contenido estaba orientado en favor de la libertad religiosa entendida como una inmunidad de coacción. Es decir, el concilio establecía que nadie podía ser obligado a actuar en contra de sus ideales, e ideologías. Ni podía ser obligado a que no practicase su religión en público, limitándola al ámbito privado. Pero para lograrlo, el concilio exigía que fuera la autoridad gubernamental la que evitase que la libertad e igualdad de la ciudadanía se viera lesionada.

Sin embargo, esto dejaba sin fundamento la legislación española del momento. Antes del Concilio la profesión católica del estado español venía matizada por la tolerancia de las demás religiones, permitiéndoles una existencia privada sin manifestaciones externas. Por lo que las ideas de libertad religiosa del concilio colisionaron con las del estado franquista.⁴²

La libertad social y civil en materia religiosa contenida en el Concilio, repercutió en el derecho español. España se vio obligada a acatar y reformar su legislación, y el artículo

⁴² José Tomás Martín de Agar y Valverde, ob. cit., p.84

6 del fuero de los españoles se reformó, para dejar atrás la mera tolerancia y pasar a la libertad respecto a las confesiones no católicas.

Este nuevo compromiso del estado se regulo en la ley de libertad religiosa de 28 de junio de 1967. Esto marco el comienzo de la crisis del sistema matrimonial español de ese momento, porque pese a ser España un estado confesional católico, tenía un gobierno franquista, y debía obediencia a las pautas establecidas por la Santa Sede.⁴³

El estado asumió la protección de la libertad religiosa mediante una eficaz tutela jurídica que a la misma vez trataba de conservar la moral y el orden público del régimen. Un pequeño avance, pero no por una faceta tolerante de la dictadura sino por una imposición para el estado confesional, y por ello la reforma fue parcial e intento que hubiera la mínima modificación de la legislación.

La intención con la que se legisló no era reformar el sistema matrimonial, pero de modo indirecto lo afectó. Porque el artículo 32 de la ley, sería el argumento para la posterior reforma del sistema matrimonial que permitirá pasar del sistema subsidiario al facultativo.

En este artículo de la ley de libertad religiosa, en su párrafo uno habla literalmente de acreditar la adscripción a una confesión religiosa no católica, mientras que en los demás párrafos del articulo únicamente habla de acreditar la no adscripción a una confesión religiosa, es decir cualquier confesión, mediante declaración expresa.

A partir de ahí, la prueba de la acatolicidad quedó reducida a términos meramente formales, a la propia declaración de los contrayentes.

Progresivamente el sistema matrimonial civil subsidiario fue sufriendo modificaciones, hasta llegar al sistema facultativo. En el que el matrimonio civil volvía a ser una opción para los contrayentes católicos, aunque si se optaba por esta vía las consecuencias legales y el estigma social seguían siendo las mismas.

⁴³ Mariano López Alcorcón y Rafael Navarro-Valls, ob. cit. p.506.

Esta situación de fuerza mayor llevó a que el gobierno franquista tuviera que hacer actuaciones forzadas y que involuntariamente terminara abriéndose hacia un régimen con más libertad y tolerancia hacia las demás confesiones religiosas.

2. Valoración del matrimonio civil en España hasta la Constitución de 1978

En el transcurso histórico de la evolución del matrimonio civil, en todas sus etapas a excepción de la segunda república, el catolicismo interfirió en su desarrollo. Lo anterior se ve reflejado en distintos aspectos. La causa más relevante todo ello fue la confesionalidad y el especial proteccionismo de que fue objeto el matrimonio canónico (único de los matrimonios religiosos reconocidos civilmente), proteccionismo que llevó a potenciar la celebración de dicho matrimonio, en detrimento del matrimonio civil, que a su vez era un matrimonio no representativo de los valores genuinamente laicos y civiles ya que procedía de la normativa de la ley provisional de 1870, que se inspiraba en todo lo posible (excepto en la celebración ante autoridad civil) en el matrimonio confesional por excelencia en España.

El matrimonio civil se erigía, así, en un instrumento *in extremis* para dar respuesta al derecho a contraer matrimonio de aquellas personas que, contradiciendo la realidad sociológica confesional católica de España, constituían una excepción a la regla general de que la población española era (y debía ser) católica. Por tanto, dicha opción matrimonial era una especie de cajón de sastre para aquellos que no eran católicos porque no tenían ninguna religión o porque tenían una que no se correspondía con la oficial, en definitiva, el matrimonio de los heterodoxos. No hace falta recordar que en la España confesional no tenían cabida ni reconocimiento otras religiones ni otros ritos matrimoniales que el católico. Y aun cuando en un momento determinado, hubo la apertura (como hemos visto, de origen confesional católico) hacia una cierta libertad religiosa, los ritos matrimoniales permitidos al margen del católico carecían igualmente de eficacia civil.

Otro dato esencial es que el matrimonio civil, durante mucho tiempo, solo se pudo celebrar si concurrían determinadas condiciones, en especial que se cumpliera el requisito de la aconfesionalidad por parte de al menos uno de los contrayentes, o por parte de ambos, según las circunstancias históricas. Siendo con la llegada del

franquismo obligación de ambos contrayentes demostrar (probar) su aconfesionalidad para poder acceder al matrimonio canónico, aunque la intensidad y rigor de dicha prueba no fue siempre la misma, sino que Esto fue variando en función del momento social y político, y de la relación del Estado con la iglesia católica. Pero incluso en la etapa final del tardofranquismo, la interpretación que se dio del art. 42 del Código civil fue la necesidad, no de prueba de acatolicidad propiamente dicha, pero sí de declaración de ambos contrayentes de no profesar la religión católica. Aunque muchos consideraron esto un triunfo de la liberación del sistema matrimonial hacia una opcionalidad absoluta, debemos indicar que tal solución no es admisible en un Estado de Derecho, por cuanto nadie debe estar obligado a declarar sobre su religión o creencias, tal como recogería después el art. 16 de la Constitución de 1978.

En todo caso, la sombra del matrimonio canónico sobre el matrimonio civil provocó que a lo largo de su desarrollo y en la forma en que este se fue regulando, aparecieran contenidos y connotaciones sustancialmente conservadoras, fruto de la influencia del matrimonio canónico. Manteniéndose así, en lo substancial, hasta la reforma del Código civil por la ley 30/1981, de 7 julio. Con ella se pone fin al menos a las connotaciones expresamente confesionales, aunque en determinados aspectos se mantendrían normas de fundamento conservador.

Al estar el matrimonio civil fundamentado en criterios confesionales, y haber transcurrido su evolución en tales circunstancias y condicionamientos, en su origen es un matrimonio desubicado y en cierto modo *contra natura*. Y si, además, tenemos en cuenta las dificultades que en prácticamente todas las etapas históricas ha habido para poder contraer matrimonio en forma civil (no únicamente la cuestión jurídica de la acatolicidad, sino también las presiones sociales y trabas político religiosas) se comprenderá la escasa trascendencia jurídica y práctica del matrimonio civil.

En esta línea, cabe constatar el escaso tratamiento jurisprudencial, consecuencia directa de su escaso uso y de los límites propios de los criterios morales con los que se había construido, provocando así un inmovilismo latente y una falta de adecuación a la realidad social muy evidentes.

Debido a este fenómeno, se produjo una situación sorprendente: el matrimonio canónico, que era el contraído por la mayoría de la población, si fue objeto de tratamiento y evolución jurisprudencial por parte de los tribunales eclesiásticos, los cuales, dentro de sus posibilidades y rígidos esquemas del Derecho canónica, intentaron, sobre todo a partir de la década de los setenta, proporcionar soluciones *pastorales* que facilitaran la solución de conflictos.

Un ejemplo de esto fue que, en materia de nulidad matrimonial, también llamado divorcio católico, la regulación eclesiástica ofrecía mucha más flexibilidad que su figura equivalente en el matrimonio civil. En ambos casos el matrimonio era indisoluble, pero la apertura jurisprudencial canónica en la interpretación y aplicación de las causas de nulidad, permitió dar salida a muchos conflictos, es verdad que durante algún tiempo con favoritismos a ciertas clases sociales, pero democratizándose después en favor de la población en general.

Otro campo en el que se desarrolló esta actitud pastoral de la Iglesia fue en la de separación conyugal, la cual se podía acordar por vía administrativa o judicial. Lo más novedoso es que la Iglesia acabó admitiendo, *de facto*, la separación de mutuo acuerdo. Ciertamente según el Derecho canónico la separación debía darse solo por causa legal, bien por adulterio (que era la única causa de separación perpetua), bien por incumplimiento de los deberes conyugales o familiares, en cuyo caso, y para ser exactos, la causa legal no era este incumplimiento, sino la previsión de que la vida en común siguiera siendo demasiado difícil en el futuro. Pues bien, aparte de que dichas separaciones temporales se convertían en la práctica en indefinidas, la clave de todo fue considerar que si se probaba que la vida en común era demasiado difícil había derecho a la separación. Así las cosas, si de la declaración de las partes se desprendía esta grave dificultad de conciencia, y así lo avalaban dos testigos (todo ello mediante unos interrogatorios de puro trámite) se daba lugar a la separación e incluso aprobando convenios reguladores (cuya eficacia civil no fue nunca demasiado clara). Mientras tanto, en los esquemas civiles se continuaba con las causas de separación basadas en la culpabilidad y sin reconocimiento de la separación de mutuo acuerdo que no llegaría hasta la reforma de 1981.

Por ello se ha dicho con razón y gráficamente que el matrimonio civil era más indisoluble (en sentido no técnico, sino social) que el canónico, contradicción sorprendente que se explica por los antecedentes que hemos puesto de relieve.

3. La Constitución Española

En todos los estados democráticos, ya sean Republicas o Monarquías, sus ordenamientos jurídicos están presididos por una norma, la Constitución.

La Constitución es la expresión de la autodeterminación política de un Estado y a su vez limita su poder, garantizando el apropiado desarrollo de la libertad de los ciudadanos, y de sus derechos fundamentales.⁴⁴

La Constitución, norma fundamental, es parte del ordenamiento jurídico y comprende los valores superiores de este. Están sujetos a ella tanto los ciudadanos como los poderes públicos. Siempre prevalece ante toda norma contraria a sus disposiciones, pues ésta estaría fuera del ordenamiento al ser incompatible y contraria a la norma institucional básica.

La CE por el carácter jurídico que tiene y su posición básica en el ordenamiento es el elemento primordial expresivo de los valores superiores y de los derechos fundamentales del Estado. Tutela todos los derechos que impliquen libertades básicas de los ciudadanos, y garantiza que no serán transgredidos. Pues si por alguna actuación quedaran afectados, esta sería tachada de inconstitucional.

En España la situación que allanó el camino para hacer posible la llegada de la Constitución fue que el 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco, dando fin a la Dictadura. Dos días después fue proclamado Rey Juan Carlos de Borbón. Y tras un tedioso y difícil proceso de reforma política, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones después de la dictadura. Y tras una intensa e difícil

⁴⁴ Juan Goti Ordeñana, ob. cit. p.203.

negociación entre los partidos políticos, finalmente, el 29 de diciembre entró en vigor la Constitución española.

En este proceso de negociación y redacción del texto constitucional, las cortes albergaron una tensa discusión parlamentaria por la diversidad de opiniones, y porque la principal pretensión que se tenía era que su contenido fuera aceptado y acogido por la mayor parte de partidos y ciudadanos.⁴⁵

No fue distinto a la hora de redactar el artículo que regula el matrimonio, debido a que debía decidirse cuál sería la postura del Estado en relación con el trato que el Derecho civil debía dar a la institución del matrimonio. Hay que tener en cuenta que al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta reforma política se trataba con la Santa Sede la revisión del concordato de 1953, y con ello se reabría la histórica dialéctica entre jurisdicción eclesiástica y jurisdicción civil en materia matrimonial en España.⁴⁶

Aunque la llegada de la Constitución supuso un avance en el proceso secularizador, pues el Estado se proclamó aconfesional en su artículo 16. Además de establecer la garantía constitucional en materia de libertad ideológica, religiosa y de culto. Y prohibió que nadie pudiera ser obligado a declarar sobre sus creencias. Sin embargo, las creencias religiosas de la sociedad, en su mayoría católica, se tuvieron en consideración.

La posición competencial del Estado en relación con el matrimonio puede concretarse en dos ámbitos fundamentales. Uno, la competencia exclusiva frente a las comunidades autónomas (art. 149.1.8) por la que el Estado quien tendría competencia para regular las relaciones jurídico civiles relativas a las formas de matrimonio, entendida esta competencia en los aspectos básicos de la regulación matrimonial (sin perjuicio de las posibles competencias autonómicas en materia de relaciones derivadas, de carácter económico patrimonial, personal, etc.). Un segundo ámbito se refiera a la competencia del Estado frente al derecho matrimonial de las Confesiones. En dicho ámbito no es baladí que después de la reforma de 1958 que llevó a modificar el art. 42 CC en el sentido de sustituir la expresión formas por la de clases –precisamente para subrayar

⁴⁵ José Tomás Martín de Agar y Valverde, ob. cit. p. 94

⁴⁶ Víctor Reina, Josep M. Martinell, p.180.

que la recepción civil del matrimonio canónico lo era en su integridad y no sólo como forma de matrimonio– la Constitución de 1978 volviera a la expresión formas de matrimonio, con lo que implícitamente comportaba el término, a saber, que toda asunción civil del matrimonio religioso lo sería sólo en calidad de forma, con necesidad por tanto, de respeto a las condiciones civiles para celebrarlo, ya que otra cosa era incompatible con los principios de aconfesionalidad y de igualdad.

No obstante, esta conclusión no fue aceptada doctrinalmente por todos y quedó abierto el debate, en el que también tomó protagonismo la redacción de los Acuerdos sustitutorios del Concordato de 1953, finalmente suscritos el 03.01.1979, en particular el relativo a Asuntos Jurídicos, en el que se regulaba la eficacia civil del matrimonio religioso, por cierto con un grado de ambigüedad suficiente que no permitía por sí mismo llegar a conclusiones claras en este punto, aunque pensamos que el principio de matrimonio civil único con posibilidad de forma civil o religiosa es la única interpretación de acuerdo con la Carta Magna.

En todo caso, y por referirnos a los hitos más importantes, podemos decir que la Constitución comportó, en primer lugar, la intervención de la Dirección General de los Registros y del Notariado que por Instrucción del 26.12.1978 declaró que había que considerar reformado el art. 42 C.c. en el sentido de que ya no podía exigirse prueba ni declaración de acatolicidad a los contrayentes de matrimonio civil ya que ello infringía el principio de que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias (art. 16 CE), que se consideraba de aplicación inmediata.

Por otra parte, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. En su artículo segundo 1 b, declara el derecho a la celebración de ritos matrimoniales religiosos. Citamos la norma porque supone la consagración en este punto del principio de libertad, aunque en realidad no afecta al sistema matrimonial habida cuenta que tal derecho no implica la eficacia civil de dichos ritos.

Supuesto lo anterior, quedaban otros asuntos que resolver. El primero y principal, si el matrimonio religioso debía ser admitido civilmente en su integridad o sólo como forma de matrimonio. La cuestión quedó formalmente resuelta a través de la reforma del CC.

por ley 30/1981 de 7 de julio, cuyo art. 44 decía que El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. Y estas normas son idénticas para el matrimonio religioso y el civil, excepto en la variedad de las respectivas formas de celebración. Sin embargo, ni siquiera en este momento se pacificó la cuestión doctrinal, ya que los planteamientos más conservadores entendían que se había traicionado el contenido del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos.

Otra cuestión que quedaba pendiente era el del principio de igualdad entre las Confesiones, ya que la católica tenía un tratamiento privilegiado pues era la única que tenía prevista la eficacia civil de su matrimonio. Esta discriminación quedó paliada gracias a los Acuerdos de cooperación del Estado con las Confesiones Religiosas, en virtud de las cuales también adquirirían eficacia civil los matrimonios en forma evangélica, israelita e islámica. La iglesia católica firmó el acuerdo de 3 de enero de 1979, la iglesia evangélica lo hizo a través de la ley 24/1992 de 10 de noviembre, las comunidades judías a través de la ley 25/1992 de 10 de noviembre, y la confesión musulmana por la ley 26/1992 de 10 de noviembre.

Pero la discriminación se mantenía respecto a otras confesiones religiosas, y el siguiente paso ha sido el de admitir también la eficacia civil de las formas de matrimonio de otras confesiones religiosas que tienen reconocido el notorio arraigo, aunque no tengan Acuerdo de cooperación con el Estado.

La definición de los requisitos y el procedimiento para la declaración del notorio arraigo de las confesiones religiosas, se regula mediante el Real Decreto 593/2015, de 03 de julio. Dichas otras confesiones a las que se les reconoce, son las siguientes: mormones, ortodoxos, Testigos de Jehová, budistas.

Sin embargo, tampoco dicha solución no parece suficiente ya que quedan fuera de la eficacia civil del matrimonio de otras muchas confesiones, cosa especialmente grave tratándose de Confesiones debidamente inscritas en el Registro de Entidades religiosas.

Por otra parte, no se ha conseguido resolver satisfactoriamente el tema histórico de la eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas (nulidades i rescriptos papales de

disolución del matrimonio no consumado), ya que si bien desde el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos se salvan los principios del Estado de Derecho no confesional (eficacia no automática, que requiere instancia de parte, intervención del Ministerio Fiscal y resolución de órgano jurisdiccional civil competente, declarando la sentencia ajustada al Derecho del Estado), en la práctica, la interpretación jurisprudencial tan absolutamente flexible sobre dicho ajuste al Derecho del Estado ha favorecido que por esta vía se haya reintroducido el derecho confesional de fondo en el ámbito civil, dando lugar a homologaciones de sentencias canónicas por causas que jamás hubieran podido prosperar por la vía directamente civil. Ello supone una grieta al principio de matrimonio único con pluralidad solamente de formas, pero no de contenidos de fondo.

Estos los principales problemas que derivan del proceso secularizador del matrimonio en España a raíz de la Constitución, sin perjuicio de otros muchos problemas técnicos e incluso de contradicciones legales que no son de este lugar.⁴⁷

Existe una única institución del matrimonio, pues hay unidad institucional del matrimonio. Esta queda materializada en la regulación del código civil, la ley orgánica de libertad religiosa de 24 de julio de 1980, y la CE. El 1958, el Código Civil español sufrió una reforma, a esta primera modificación del código civil, le siguió una gran reforma legislativa del mismo. Motivada por el hecho que toda la legislación existente en ese momento era confesional, y no había otro modo de obtener legislación en materia de matrimonio civil. Siendo la alternativa, que el matrimonio civil se convirtiese en una pseudo continuación del matrimonio canónico.

Después de la ley 30/1981 de 07 de julio, la problemática que surgió fue que su contenido quedaba en cierto modo invalidado por la idea de indisolubilidad del vínculo del matrimonio. Por ello se requirió un sistema que dejara claro que había libertad absoluta para romper el vínculo matrimonial, aun sin motivo o justificación más que la simple voluntad de los cónyuges.

⁴⁷ Víctor Reina, Josep M. Martinell, ob. cit. p. 205

Ello quedó reflejado en el ante proyecto de ley por el que se pretende modificar el código civil en materia de separación y divorcio, aprobada el 17 de septiembre de 2004. La principal característica de este, es que pretende que el acceso a la separación o al divorcio esté legalmente desprovisto de motivo alguno.

Quedando la persona dotada de más libertad, y concibiendo socialmente las rupturas matrimoniales de forma menos conflictivas y problemáticas. Pues el libre desarrollo y la voluntad personal quedan por encima de la institución matrimonial. Además, con ello logra una mayor agilidad y economía a los procesos matrimoniales.

Lo que no significa, que el estado no entre a regular dicha institución, las consecuencias de su ruptura o el propio fin.⁴⁸ Pues el requisito establecido y exigido fue que hubieran transcurrido tres meses des de la celebración del matrimonio.

Posteriormente, otra importante reforma del CC en materia de divorcio y separación matrimonial, fue la contenida en la ley 15/2015 de 02 de julio, de la jurisdicción voluntaria.⁴⁹ La novedad principal que aportan esta es que en el proceso de separación o de divorcio los cónyuges tienen la posibilidad de instarlos ante funcionarios distintos de aquellos a los que en un principio se les atribuyó potestad jurisdiccional.

CONCLUSIONES

1. Los orígenes del matrimonio civil se cimientan en el proceso de la secularización de la sociedad medieval y la consiguiente ruptura de la unidad político religiosa. Este proceso tiene su tiempo y ritmo en cada país, de modo que la aparición de dicha institución civil va de los siglos XVI a XIX.

⁴⁸ Agustín Cañete Quesada, *El anteproyecto de ley por el que se modifica el código civil en materia de separación y divorcio* en Porticolegal.eleconomista.es. 15.07.2015.

⁴⁹ IBIDE, *Divorcio y separación en el código civil tras la reforma por la ley 15/2015 de 02 de julio, de la jurisdicción voluntaria*. Disponible en: IBIDE.ORG. (último acceso, 30.05.2018).

2. Con anterioridad a ello aparecen algunas figuras o instituciones que tratan de juridificar la vida de pareja, pero no se pueden considerar en sentido estricto matrimonios civiles. Una muestra de dicho fenómeno es el de la barraganía regulada en el la Partida Cuarta del Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio. Se trataba de una institución tolerada para constituir una vida de pareja, con su regulación jurídica, pero que no pretendía imponerse al matrimonio canónico, sino que expresamente se reconocía como institución no matrimonial.

3. La tardía introducción en España del matrimonio civil no se produjo hasta la llamada ley provisional de 1870, fruto de la revolución septembrina de 1868, de carácter liberal, pero a la vez, muy ligada a la moral católica. Podemos afirmar que lo liberal se concreta en el propio reconocimiento del matrimonio civil y en su carácter obligatorio (en el sentido de excluir la eficacia civil del matrimonio religioso). Lo conservador, por su parte, se concreta en el contenido de la ley y en la explicitación de dichos contenidos. Se trataba de un matrimonio indisoluble, de carácter tradicional, cuya exposición de motivos de Eugenio Montero Ríos podía ser suscrita en gran parte de sus pasajes por la doctrina católica más estricta.

4. Dicha ley es fundamental para comprender la función del matrimonio civil en España. Pero hemos de distinguir entre su vigencia en cuanto a principio o sistema de matrimonio civil obligatorio, respecto de su vigencia de contenidos. En cuanto a lo primero, dicha vigencia fue muy breve, siendo un fracaso su aplicación social, ya que la población seguía contrayendo en su mayor parte matrimonio canónico (que sobre el papel no tenía ningún reconocimiento). Por eso dicho sistema duró apenas cuatro años. En cambio, en relación con la vigencia de contenidos, ésta, aunque indirectamente, duró más de un siglo, ya que el Código civil estableció la regulación del matrimonio civil, prácticamente copiando la normativa de la ley de 1870. Y ésta estuvo vigente hasta la reforma por Ley 30/1981, de 7 julio, excepto en el breve periodo de la II República.

5. A partir de los anteriores datos y partiendo del principio de confesionalidad que fue casi omnipresente hasta la Constitución de 1978 (salvando otra vez la etapa republicana), la dualidad entre matrimonio canónico y civil se inclina jurídicamente a favor del matrimonio sacramental, de manera que el matrimonio civil resulta ser

residual, sólo susceptible de ser contraído en función de la acatolicidad de los contrayentes a acreditar convenientemente (sobre todo durante el régimen franquista), concebido para los “heterodoxos” (en el sentido de personas que excepcionalmente no eran católicas) quedando en una situación de involución permanente, atado a sus principios conservadores y sin oportunidad siquiera de ser susceptible de una evolución jurisprudencial que se adecuara a la realidad social, dada su ínfima utilización.

6. Por su parte, el matrimonio canónico sufre un proceso paradójicamente inverso (dentro de los límites de la doctrina canónica). Las causas de nulidad son interpretadas y aplicadas cada vez de una forma más laxa, hasta el punto de convertirse en el llamado divorcio de los católicos. Por su parte, en punto de separación conyugal, administrativa o judicial, la Iglesia alcanza soluciones que en la práctica equivalen al mutuo acuerdo, aunque revestidas formal y aparentemente de causalidad.

7. La paradoja más llamativa es que el matrimonio civil (que en principios se supone que debía ser la punta de lanza del progreso legislativo matrimonial) se convirtió en la práctica en un matrimonio más más indisoluble (dicho sea, en términos coloquiales y no estrictamente jurídicos) que el canónico.

8. Esta concurrencia de matrimonios fue debido a que la dualidad matrimonio civil y canónico (interrumpida brevemente en la segunda república) fue una dualidad institucional, es decir, cada uno de ellos con su propia regulación y con su propia jurisdicción aplicable. Y esta situación, que ya venía siendo así desde siempre pero bajo la expresión “formas de matrimonio” fue subrayada en la reforma del Código civil por ley de 24 de abril de 1958, en la que se sustituyó “formas” por “clases”, no para modificar nada, sino para aclarar que esta expresión “formas” (ya presente en la Ley de Bases del Código civil y después en la redacción originaria de su art. 42), significaba que el Estado no solo asumía el rito matrimonial canónico, sino también todo su contenido normativo y jurisdiccional.

9. Conseguida la democratización de España, fue tarea muy laboriosa la de despojar de contenidos confesionales a la regulación del matrimonio civil. Ello tuvo lugar fundamentalmente por la ley 30/1981 de 7 de julio, modificadora del Código civil, que

no sólo incorporó el divorcio a la institución, sino que además la desprendió de todos los agregados confesionales que mantenía, al menos de los más evidentes. Pero no ha sido hasta reformas posteriores cuando se han ido depurando referencias conservadoras, proceso muy avanzado pero que aún no puede darse por cerrado definitivamente.

10. Todo ello ha ido de la mano de un cambio sustancial del sistema, cuyos rasgos más importantes (prescindiendo de numerosas deficiencias técnico jurídicas en la elaboración de las nuevas normas, que no son de este lugar) son las siguientes:

a) Establecimiento de un sistema matrimonial plenamente facultativo, en el que el estado no pone condiciones para contraer matrimonio civil o religioso.

b) Previsión de un sistema de pluralidad de matrimonios civil o religiosos (otra opción hubiera sido volver al sistema de matrimonio civil obligatorio) en la que dichos matrimonios religiosos ya no quedan (tan) discriminados. Así, se incluye no solo el matrimonio canónico, sino también los de aquellas Confesiones que tienen Acuerdos de cooperación con el Estado y aun aquellas que, no teniéndolas, tienen reconocido el notorio arraigo. (Falta aún por reconocer la eficacia civil de las demás Confesiones inscritas).

c) Regulación de un sistema basado en la pluralidad meramente formal y no material o institucional (clases de matrimonio). Aunque ello ha sido bastante costoso en lo que se refiere al matrimonio canónico (sectores conservadores consideran que supone transgredir lo acordado en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos) lo que existe actualmente (a efectos civiles) es una institución matrimonial única regulada por el Código civil a la que se puede acceder a través de distintas formas (civiles o religiosas). Sólo ese sistema nos parece compatible con el principio de aconfesionalidad (el Estado laico no puede asumir normas confesionales de fondo) y con el principio de igualdad, pues el *status* matrimonial ha de ser único para todos los ciudadanos. E incluso la herencia confesional de la eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad y de los rescriptos pontificios del matrimonio rato y no consumado, han de pasar por el tamiz de una declaración de ajuste al Derecho del Estado y dejaron de tener eficacia civil automática con en el Estado confesional.

BIBLIOGRAFIA Y WEB

MARIA TERESA ARIAS BAUTISTA, Barraganas & concubinas en la España medieval, ArCibel editores, Sevilla, 2010.

JUAN GOTI ORDEÑANA, Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado, Donostia, 1991.

JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, La formación del vínculo y los matrimonios clandestinos en la baja Edad Media, Revista científica complutense, Madrid, 2010.

MARIANO LÓPEZ ALARCÓN Y RAFAEL NAVARRO-VALLS, Curso de Derecho Matrimonial Canónico y concordado, Tecnos, Madrid, 2001,

JOSÉ MARÍA RIVES GILABERT, ANTONIO PABLO RIVES SEVA, Evolución histórica del sistema matrimonial español, Noticias Jurídicas, 21.12.2001.

VÍCTOR REINA, JOSEP M. MARTINELL, Curso de Derecho Matrimonial, Marcial Pons, Madrid, 1995.

ANDRÉS OLLERO, El debate de la ley de matrimonio civil de 1870, Revista General de Legislación y jurisprudencia, Granada, febrero 1981.

FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN, La codificación civil en España en sus dos periodos preparación y de consumación, Madrid, 1890.

JOSÉ BARROS GUEDE, Las modificaciones sobre el matrimonio en el código civil español. Revista Eclesiástica, 17.08.2014.

AMADEO DE FUENMAYOR, El matrimonio en el código civil, Conferencia en la Real Academia de jurisprudencia y Legislación en el ciclo conmemorativo del centenario del Código Civil español, 6.02.1989.

JOSÉ M. MIQUEL GONZÁLEZ, Sistema matrimonial español, 2001.

LEIRE IMAZ ZUBIAUR, Superación de la incapacidad de la mujer casada para gestionar su patrimonio, Vizcaya, octubre 2008.

CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ, La Santa Sede y la II República. De la Conciliación al conflicto (1931), ACCI, 2018.

XOSÉ CHAO REGO, Iglesia y franquismo: 40 años de nacional-catolicismo (1936-1976), Madrid, 2007.

DEMETRIO FERNÁNDEZ UCELAY, The historical evolution of all the ways to extinguish the Matrimonial bond, Universidad de La Laguna, 2016.

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, La destrucción el orden republicano, Hispanica Nova, núm. 7, 2007.

DIEGO ESPÍN CÁNOVAS, Breve exposición de la eficacia civil del matrimonio canónico en el código civil español, 1990.

JULIÁN CASANOVA, La iglesia y la represión franquista, Universidad de Zaragoza, 26.11.2008.

RAÛL MORENO ALMENDRAS, Hispánia nova, El franquismo y nacionalismo español, aproximación a sus aspectos fundamentales, núm.12, 2014.

LUIS IGNACIO AMOROS, InfoCatolica, Ingeniería Social: La ley de matrimonio civil, 16.01.2011.

JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, *El matrimonio canónico en el derecho civil español*, Eunsal, Pamplona, 1985.

AGUSTÍN CAÑETE QUESADA, *El anteproyecto de ley por el que se modifica el código civil en materia de separación y divorcio*, Porticolegal.economista.es, 15.07.2015.

Revista de historia, la guerra civil española en el contexto internacional. 18.04.2016
[www.observatorioreligion.es/gobierno de España, ministerio de justicia. Acuerdos de cooperación-](http://www.observatorioreligion.es/gobierno-de-Espana-ministerio-de-justicia-Acuerdos-de-cooperacion-)

Las siete partidas de Alfonso X: <http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T1.pdf>
(último acceso 30.05.2018).

José María Rives Gilabert, Antonio Pablo Rives Seva, *Evolución histórica del sistema matrimonial español*. *Noticias Jurídicas*, 2001.
<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11680-evolucion-historica-del-sistema-matrimonial-espanol/> (Último acceso 30.05.2018).

José Barros Guede, *Las modificaciones sobre el matrimonio en el código civil español* en *Revista Eclesiástica* 17.08.2014
<https://www.revistaecclesia.com/las-modificaciones-sobre-el-matrimonio-en-el-codigo-civil-de-espana/> (Último acceso 30.05.2018).

Amadeo de Fuenmayor, *El matrimonio en el código civil*. Conferencia en la Real Academia de jurisprudencia y Legislación en el ciclo conmemorativo del centenario del Código Civil español 6.02.1989. p. 229.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iuscan30&div=22&id=&page=> (último acceso 30.05.2018).

José M. Miquel González, *Sistema matrimonial español*, 2001.

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Miquel_Gonzalez/publication/28250204_Sistema_matrimonial_espanol/links/0a85e5325f4406d6a7000000/Sistema-matrimonial-espanol.pdf?origin=publication_detail (último acceso, 30.05.2018).

Revista de historia, *La guerra civil española en el contexto internacional*, 18.04.2016.

<https://revistadehistoria.es/la-guerra-civil-espanola-contexto-internacional/>

(último acceso 30.05.2018).

Julián Casanova, *La iglesia y la represión franquista*, Universidad de Zaragoza, 26.11.2008. https://elpais.com/diario/2008/11/26/opinion/1227654005_850215.html

(último acceso 30.05.2018).